

LA semana política de A.L.

MARCOS KAPLAN
UNAM

El Gobierno norteamericano sigue incrementando su asistencia a la Junta Militar de El Salvador, con el doble objetivo de frenar la amenaza guerrillera, que prosigue, y favorecer reajustes socioeconómicos que aceleren la integración de ese país, y de toda la región, a los requerimientos actuales y previstos del nuevo modelo de dominación. Las necesidades de la ofensiva gubernamental contra las guerrillas llevan incluso a la violación del territorio y del espacio aéreo de Honduras por tropas y aviones de El Salvador. Empresarios alentados por ciertos signos de apoyo del gobierno Reagan, presionan por un cambio en la composición de la Junta Militar, y hacen responsable de la crisis económica al presidente Duarte, que a su vez los califica como conservadores y peligro mayor que las guerrillas, así como de instigadores al golpe de Estado. Los altos jefes del Gobierno y las Fuerzas Armadas se siguen apoderando en Guatemala de las ricas tierras de la franja transversal del Norte, valiosas como propiedad, recurso productivo, y sede de reservas petroleras que perforan varias transnacionales. Se da así otro ejem-

plo específico de los rasgos de amafiamiento que presentan las dictaduras latinoamericanas actuales, con una combinación en proporciones variables de violencia despiadada, corrupción generalizada e incontrolada, uso del poder y del genocidio para una peculiar versión de acumulación primitiva. El Gobierno de Guatemala amenaza con no reconocer la independencia de Belice otorgada por Gran Bretaña a partir del próximo 21 de septiembre. La relativa distensión entre Nicaragua y Honduras es rota por incidentes fronterizos. El Gobierno de Nicaragua enfrenta por una parte tensiones diplomáticas con el de Colombia, que pretende apoderarse de tres islotes en litigio, ubicados en la plataforma marítima del primero, y también ser aceptado por el Gobierno de E.U. como socio menor de la estrategia norteamericana en el Caribe y Centroamérica. La actividad de organizaciones guerrilleras se reanima tras el fracaso de la amnistía que el presidente Turbay les ofreció.

También en Sudamérica, el gobierno Reagan apoya cada vez más decididamente a regimenes como los del cono sur, en lo político, lo económico y lo militar, con el justificativo de una "mejora sustancial" de los derechos humanos en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Si este optimismo sesgado es debatible, resulta en cambio indudable la constatación de las dificultades de tales regimenes para transitar hacia alguna versión de apertura democrática. La Unidad Democrática y Popular, principal coalición electoral de Bolivia, lanza un llamado a todos los sectores de oposición, para una acción común que amplíe la resistencia contra el régimen del general García Meza, mientras continúan las versiones sobre preparativos golpistas. Las Fuerzas Armadas del Uruguay encuentran dificultades para definir si el próximo presidente será civil o militar, aparentemente por discrepancias entre los altos mandos en cuanto a los ritmos, contenidos y alcances de la eventual apertura democrática.

El gobierno del presidente Viola, en Argentina, sigue sufriendo los embates de una creciente oposición, proveniente a la vez de dirigentes y grupos políticos, sindicatos obreros, empresariales, intelectuales, eclesiales. Ello expresa además un cuestionamiento del modelo políticoeconómico aplicado desde 1976, interrogantes cada vez más enérgicos y explícitos en cuanto a la justificación de sus costos sociales y humanos, y a las responsabilidades políticas y legales de sus ejecutantes, inspiradores y beneficiarios. Dirigentes políticos siguen trabajando en la convergencia multipartidaria, parte quizás de un proyecto de convergencia civil-militar que el presidente Viola y su grupo inmediato no vería con malos ojos. Si los líderes partidarios tienen a exigir fechas fijas para las elecciones, y el Gobierno anuncia un estatuto de los partidos para 1982, la perspectiva de la normalización se ve perturbada a la vez por los descontentos y exigencias de grandes sectores de la sociedad argentina, y por la desconfianza de los sectores duros de las Fuerzas Armadas y de la gran empresa. A ello se agregan dificultades externas, ante todo el estancamiento y fricciones de las negociaciones con Chile y del arbitraje papal, y ciertas tensiones con Estados Unidos. Esto último trataría de ser atenuado por un posible envío de un contingente para la fuerza militar multinacional en el Sinal.

EL UNIVERSAL

Asegura Chile que la mediación papal se activará en septiembre

SANTIAGO, 10. de agosto (AFP).— La mediación del Papa Juan Pablo II en el litigio que mantienen Chile y Argentina por la posesión de la región del canal Beagle, se activará notablemente en septiembre próximo, anticipó hoy aquí el jefe de la misión chilena en el caso, Enrique Berstein.

El diplomático regresó el viernes a Santiago para informar personalmente de su gestión a la cancillería, aprovechando el tradicional receso veraniego en el Vaticano.

Concluido el periodo de vacaciones en Roma, el cardenal Antonio Samore, el delegado papal en el proceso mediado, "va a empezar a moverse muy activamente, en los primeros días de septiembre", lo que debe interpretarse como el deseo de llegar a una pronta solución, manifestó Berstein.

El embajador chileno destacó

que, a diferencia de lo ocurrido en los años anteriores, en el presente receso de verano la oficina de Samore seguirá funcionando a cargo de monseñor Faustino Sáenz, para que no se interrumpan las gestiones hacia y desde las partes.

El Papa está realmente preocupado de que el proceso avance y lo haga en buena forma, para que tenga pleno éxito, afirmó Berstein.